



# Chile frente al riesgo de la complacencia

POR MICHAEL PEDERSEN, ACADÉMICO ESCUELA DE NEGOCIOS, UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Transparency International publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2025, que mide la percepción de corrupción en el sector público a partir de la opinión de expertos y empresarios. La organización define corrupción como el abuso del poder encomendado para beneficio privado. En esta edición, Chile obtiene 63 puntos en una escala de 0 a 100, donde valores más altos reflejan menor percepción de corrupción.

En América, el promedio regional es 42 puntos. Chile se ubica cerca de Estados Unidos (64) y por debajo de Uruguay (73), el país mejor evaluado de América Latina. Sin embargo, el informe advierte que varios países con puntajes relativamente altos han retrocedido desde 2012. Ese también es el caso de Chile: en 2012 alcanzaba 72 puntos, mientras que en 2024 y 2025 registra 63. Aunque sigue bien posicionado en la región, la trayectoria de la última década muestra un dete-

riorio gradual.

Tendemos a ver la corrupción como un problema ético, pero también es un problema económico. La investigación muestra que reduce inversión y crecimiento, afecta la productividad y distorsiona el gasto público al desviar recursos hacia proyectos menos eficientes. Eleva los costos de obras y compras mediante sobrepagos y menor competencia. En distintos países, reformas sostenidas para reducir la corrupción se han asociado con mayores ni-

veles de ingreso en el largo plazo. En el plano fiscal, se vincula con mayor endeudamiento y con menos margen para enfrentar shocks. En el plano social, los pagos informales pueden operar como un “impuesto regresivo”, afectando con mayor intensidad a los hogares más vulnerables y limitando su acceso a servicios básicos.

El CPI 2025 subraya áreas críticas: la fortaleza del sistema de justicia, la integridad política, la libertad de prensa, el espacio cívico y la transparencia

en la provisión de servicios públicos. La experiencia comparada muestra que cuando estas dimensiones se debilitan, aumentan los riesgos de captura y de erosión institucional.

A la luz de estas recomendaciones generales, para Chile resulta razonable fortalecer la protección a denunciantes y asegurar mecanismos efectivos contra represalias; aumentar la transparencia y fiscalización del financiamiento político y de la actividad de lobby; profundizar los estándares de inte-

gridad y competencia en compras públicas; y resguardar la independencia judicial como condición para que las normas se cumplan en la práctica.

Chile no enfrenta hoy los niveles de corrupción de las economías peor evaluadas de la región. Pero el riesgo no siempre se manifiesta en escándalos visibles, sino en retrocesos graduales. Las decisiones que postergamos hoy pueden transformarse en problemas estructurales mañana. ¿Podemos hacerlo mejor?

